



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

1

Medellín, cuatro (04) de agosto de dos mil veintidós (2022).

DEMANDANTE: **ENLLE VANESA HERRERA VELASQUEZ**
LITIS CONSORTE
NECESARIO POR PASIVA: **JHOJAN ALEXANDER LOPEZ HERRERA**
DEMANDADA: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL-
UGPP.**
TIPO DE PROCESO: **ORDINARIO LABORAL.**
DECISIÓN: **CONFIRMA-MODIFICA.**

En la fecha, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, se reunió para resolver la apelación presentada por la parte Demandada Y el Grado Jurisdiccional de Consulta que se surte en favor de ésta última , dentro del Proceso Ordinario Laboral adelantado por **ENLLE VANESA HERRERA VELASQUEZ** en contra de la Administradora de Fondo de pensiones, **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL- UGPP**, frente a la decisión adoptada por el Juzgado de Conocimiento.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA:

UGPP: Que de conformidad con el Art. 46 de la Ley 100 de 1993 es claro que no solo se exige la condición de la convivencia continua e ininterrumpida de quienes tengan vivo y actual su vínculo matrimonial, mediante el auxilio mutuo, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común, entendida ésta en presuntos estados de separación impuesta por la fuerza, las circunstancias, como podrían ser las exigencias laborales o imperativo legal los económicos, lo que implica necesariamente una ocasión, pero que indudablemente no existe respecto de aquellos que permanecieron separados de hecho por un largo período así en alguna oportunidad de la vida, teniendo esa condición de cónyuge o compañero o compañera permanente, hubieran procreado hijos.

Que en el eventual caso de una condena solicita se tenga en cuenta que la parte demandante en sede administrativa no cumplió con su carga procesal de demostrar la convivencia con el causante, por lo tanto la negativa del reconocimiento pensional

efectuado ante la falta de certeza, por ende no hay lugar a la condena y agencias en derecho puesto que la UGPP ha obrado conforme a los postulados legales y bajo el principio de la buena fe.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

2

ANTECEDENTES:

PRETENSIONES:

Solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del causante, con retroactivo pensional y los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y/o la Indexación.

HECHOS:

1. Que la demandante y el señor JHON ALEXANDER LOPEZ OSPINA, convivieron como compañeros permanentes, compartiendo techo, lecho y mesa desde julio de 1998 hasta el momento de la muerte del segundo ocurrida el 17 de junio de 2005; convivencia que estuvo interrumpida por circunstancias de fuerza mayor, ya que el causante estuvo privado de la libertad por un lapso de dos años. Y que dicha relación procrearon 1 hijo, de nombre Jhojan Alexander López Herrera.
2. Que la demandante hizo reclamación administrativa ante COLPENSIONES para el reconocimiento de la prestación, por ella misma y por su hijo, el 26 de julio de 2006; pero ésta mediante Resolución 1008 del 29 de noviembre de 2006, concedió la pensión solo en favor del menor, negándosela a ella, aduciéndole no haber acreditado los 5 años de convivencia con el causante.

CONTESTACIÓN:

UGPP: se opuso a las pretensiones de la demanda; proponiendo como Excepciones: inexistencia de la obligación y prescripción.

LITIS CONSORTE NECESARIO POR PASIVA: accedió a las pretensiones de la demanda.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Declaró que la demandante en calidad de compañera permanente del causante, es beneficiaria de la pensión que dejó causada éste último. En consecuencia, Ordenó a la entidad demandada –UGPP- pagar a la actora un retroactivo pensional en un 50% SMLV por la suma de **\$26.464.451** debidamente Indexado, causado desde el 4 abril de 2017 - cuando el hijo común cumplió los 18 años de edad- hasta el 31 de octubre de 2021; y a inscribirla en nómina de pensionados a partir del 1 de noviembre 2021 para que le continúen pagando la pensión de sobrevivencia en suma equivalente al 50% del SMLV, sobre 14 mesadas, la cual acrecerá cuando se deje de pagar la pensión a su hijo Jhojan Alexander López Herrera. Absolvió del pago de los intereses moratorios. Y Condenó en Costas procesales a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL-UGPP, y en favor de la Parte actora.

Consideró el A-quo, que aquí la muerte del causante fue de origen laboral. Que en Res. 1008 del 29 de noviembre de 2006, la ARP Seguro Social concedió pensión al menor hijo por el fallecimiento de su padre. Y en cuanto a la convivencia de la actora con el causante, dijo que en la vida cotidiana pueden darse circunstancias que determinen que una pareja no pueda vivir junta, y aun así subsista la publicidad, periodicidad, permanencia y singularidad en la convivencia exigida, como por ejemplo, cuando ocurre una fuerza mayor, que fue lo que aconteció en este caso donde el causante fue privado de su libertad. Que los testimonios recibidos en el Proceso, dan fe de que la demandante una vez quedó en embarazo, se fue a vivir con el causante, separándose únicamente cuando él cayó en prisión, reanudando la convivencia cuando él terminó su condena. Y concedió la pensión desde cuando el hijo común cumplió la mayoría de edad, porque antes ella estaba recibiendo el 100% de la prestación en nombre del menor, pero en todo caso ingresaba al patrimonio del hogar, y lo hizo hasta diciembre de 2020.

3

APELACION:

UGPP: Solicita que se absuelva y revoque la sentencia de instancia, advirtiendo que si bien existe una declaración juramentada de convivencia entre la pareja con fecha del año 2003, lo cierto es que la misma carece de fecha de inicio, limitándose a decir que la convivencia data desde hace cuatro años. Que además el informe adelantado por el ISS determinó que las pruebas recolectadas permiten concluir que el causante sí vivió con la demandante pero solo por un lapso de 2 años y 5 meses, no cumpliendo así el requisito exigido por la ley. Y frente a las Costas, manifestó que la entidad actuó de buena fe ya que le reconoció pensión al hijo del causante, Jhojan Alexander López.

CONSIDERACIONES DE LA SALA.

Objeto: Determinar en el caso a estudio, si la demandante logró probar en el Proceso la calidad de beneficiaria del causante en calidad de compañera permanente del mismo; y, por tanto, si le asiste el derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional, de la indexación; y lo relativo a las Costas Procesales. Veamos:

El art. 11 de la ley 776 de 2002 (por medio de la cual dictaron normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales), consagra:

“Muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales. Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su reglamentario”.

En tanto el señor JHON ALEXANDER LOPEZ OSPINA falleció el 17 de junio de 2005 (fl. 15), la normativa aplicable al caso objeto de estudio, es el artículo 47 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, que es del siguiente tenor:

“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) *En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;(...)*

c) *Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante mientras subsistan las condiciones de invalidez (...)*”.

JURISPRUDENCIA:

Respecto al tema, la Corte Constitucional en SU 149 del 21 de mayo de 2021, M.P Gloria Stella Ortiz Delgado, expresamente consideró lo siguiente:

“Sobre la violación directa de la Constitución, la Sala sostuvo que se desconoció el principio de igualdad con la interpretación del requisito de convivencia previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. La distinción introducida por la Corte Suprema de Justicia, al disponer que la exigencia al cónyuge o la compañera o compañero permanente de acreditar el mínimo de cinco años de convivencia anteriores al fallecimiento del causante solo era aplicable cuando estos fueran pensionados, mas no en el caso de los afiliados, no armoniza con los propósitos de la pensión de sobrevivientes ni con los del requisito de convivencia. Así mismo, esa diferenciación carece de una justificación objetiva que atienda al principio de igualdad, por lo que resulta arbitraria.

Los requisitos previstos en este artículo y, particularmente, el del período de convivencia, tienen la finalidad de garantizar que la pensión de sobrevivientes sea otorgada a sus verdaderos destinatarios y así impedir que, ilegítima y artificiosamente, personas distintas a quienes conforman el grupo familiar logren el reconocimiento de la prestación pensional. En últimas, estos objetivos se resumen en la intención de proteger a la familia del causante y los intereses de sus miembros. De nuevo, es importante destacar que, en virtud del principio de igualdad, estas protecciones deben cobijar por igual a las familias de los afiliados y de los pensionados.”.

Así las cosas, y en vista de que el Precedente constitucional proveniente de Sentencias de Unificación de la Corte Constitucional -entre otras- son de obligatorio cumplimiento para los demás Jueces, lo que significa que no pueden ser desatendidas por los mismos; en el caso a estudio, la aquí demandante debió demostrar en el Proceso que convivió con el causante, en una comunidad de vida y conformación de un núcleo familiar con vocación de permanencia, durante los últimos cinco (05) años anteriores a la muerte de éste último, para poder hacerse acreedora del derecho pretendido.

Ahora, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Cas. Laboral definió el requisito de convivencia, en la SL-1399-2018, Rad. 45779, M. P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, así:

“CONVIVENCIA - «comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva. Así, la convivencia real y efectiva entraña una comunidad de vida estable, permanente y firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida, apoyo espiritual y físico, y camino hacia un destino común. (...)”.

Y en SL 1399 de 2018, Rad. n.º 45779, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, dijo la Corporación:

“la jurisprudencia laboral ha sostenido que la convivencia debe ser evaluada de acuerdo con las peculiaridades de cada caso, dado que pueden existir eventos en los que los cónyuges o compañeros no cohabiten bajo el mismo techo, en razón de circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza mayor o similares, lo cual no conduce de manera inexorable a que desaparezca la comunidad de vida de la pareja si notoriamente subsisten los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos esenciales y distintivos de la convivencia entre una pareja y que supera su concepción meramente física y carnal de compartir el mismo domicilio”.

5

PRUEBAS.

PRUEBA DOCUMENTAL:

La Sala se permite aclarar que en el expediente no reposa prueba de la Investigación administrativa realizada por Colpensiones a la accionante, y a la que se alude en la Resolución 1008 del 29 de noviembre de 2006, que tomó como soporte para negar la pensión a la misma.

- Copia de Registro Civil de Defunción del causante (fl.15).
- Copia de la Cédula de Ciudadanía del hijo común, Jhojan Alexander López Herrera, nacido el 4 de abril de 1999 (fl.21).
- Copia de Resolución 1008 del 29 de noviembre de 2006 de la ARP Seguro Social, en la que se concedió pensión al menor hijo de la pareja, negándosela a la demandante. (fl.13).
- Declaración extra juicio rendida por la demandante y el causante en la Notaría Diecinueve del Círculo de Medellín, con fecha 28 de febrero 2003, en la que afirmaron estar conviviendo desde hacía 4 años y medio. (fl. 23).

INTERROGATORIOS DE PARTE:

DEMANDANTE.

“P ¿Que le paso a Johan que lo llevó a la muerte? R/él manejaba una bolqueta y lo iban a robar y lo mataron.

P ¿Cuando él falleció donde vivía? R/ en Belén Rincón conmigo y mi hijo.

P ¿Casa propia o alquilada? R/mi mamá nos dejó el primer piso para vivir.

P/ ¿Entonces de quien es la casa? R/de mi mamá, ella vivía en el segundo piso y el primero para nosotros.

P ¿En qué fecha empezaron a vivir juntos? R/después que cumplí los 17 años porque quedé en embarazo, en julio 14 de 1998.

P ¿Cuando él murió tenía más hijos? R/no.

P ¿Trabajaba independiente? R/no, él trabajó con la empresa “Nicolás Herrera”.

P ¿El estuvo privado de la libertad? R/sí, desde principios del 99 en el Meta, hasta octubre de 2022.

P ¿Hasta qué fecha le pagaron a su hijo la pensión? R/como tuve problemas con su certificado de estudio, fue hasta el año pasado, hasta diciembre de 2020, a partir de ahí no le han vuelto a dar.

P ¿En qué año conoció a su pareja? R/lo conozco de toda la vida porque él vivía al frente de mi casa y a principios del 98 empezamos de novios y yo quedé embarazada.

P ¿En que año fue a la cárcel él? R/en el 99, tenía yo 7 meses de embarazo.

P ¿Quién pagó las exequias de él? R/entre la mamá y yo”.

JHOJAN ALEXANDER LOPEZ HERRERA (hijo de la pareja).

P/ ¿Qué años tiene y estudios? R/22 años y estoy estudiando una técnica.

P/ ¿Recibe pago de pensión por su padre? R/no, hasta diciembre del año pasado.

P/ ¿Qué entidad le ha pagado? R/la UGPP.

P/ ¿Cuándo murió su padre que edad tenía usted? R/ 5 años.

P/ ¿Cuándo él murió donde vivían? R/en la casa de mi abuela”.

TESTIMONIAL:

PARTE DEMANDANTE.

CRUZ ELENA VELASQUEZ (madre de la demandante):

P/ ¿Cuántos años convivió su hija con él ? R/en el 98 y cuando salió de la cárcel.

P/ ¿Cuándo murió él? R/jummm no me acuerdo, a él lo atracaron y lo mataron.

P/ ¿En qué dirección vivía él? R/en mi casa con mi hija.

P/ ¿Cuánto llevaba viviendo él ahí cuando murió? R/desde que salió de la cárcel.

P/ ¿El tenía hijos? R/sí, mi nieto Johan, el tenía como 5 años cuando murió.

P/ ¿A dónde velaron a Johan? R/en “Campos De Paz”.

P/ ¿Ellos se separaron? R/no nunca, además de que él estuvo preso, pues nunca.

P/ ¿Económicamente que le brindaba a Ellen? R/todo porque él siempre fue muy juicioso con su trabajo y ella trabajó en oficios varios.

P/ ¿Cada cuánto Ellen lo visitaba en la cárcel? R/cada 8 días, ella nunca le faltó”.

CAROLINA VELA OSPINA (prima del fallecido):

P/ ¿Cómo se llamaba su primo? R/ Jhon Alexander Lopez Ospina.

P/ ¿Qué edad tenía usted cuando él murió? R/18 años.

P/ ¿A qué se dedicaba él? R/manejaba una volqueta.

P/ ¿Cuándo él murió tenía hijos? R/sí, uno.

P/ ¿El donde vivía cuando murió? R/en Belén Rincón, con Ellen y su hijo.

P/ ¿Casa propia o alquilada? R/es de la mamá de ella.

P/ ¿Usted vivía cerca? R/unas cuantas cuerdas.

P/ ¿Los visitaba? R/no con mucha frecuencia.

P/ ¿Y cómo le consta que vivía con Elle? R/ellos empezaron a vivir en el 98 porque ella quedó embarazada, hasta el 2005.

P/ ¿Ellos se separaron? R/pues cuando él estuvo en la cárcel, pero ella lo visitaba.

P/ ¿En donde estuvo recluido? R/en Bellavista y en el Meta.

P/ ¿Cuántos hijos tiene Ellen? R/dos, Gabriel con 7 años y Johan 22 años.

P/ ¿Usted conoció al papá de Gabriel? R/sí, él falleció.

P/¿Ella vivió con el papá de Gabriel ? R/no que yo sepa”.

En el presente caso, se encuentra acreditado que el ISS mediante Res. 1008 del 29 de noviembre de 2006, reconoció al menor Jhojan Alexander López Herrera, Pensión de Sobrevivientes a partir de enero de 2007, no así a la aquí demandante en calidad de compañera permanente del causante (fl.14).

Ahora, en cuanto a la convivencia entre la demandante y el causante, se tiene que en criterio de la Sala, la misma sí se encuentra acreditada por un término incluso superior a los cinco (05) años anteriores a la muerte del último, como lo requiere la jurisprudencia nacional; y es que si bien cuando ambos llevaban dos años y medio de convivencia, esta fue interrumpida, ello obedeció a razones de fuerza mayor, ya que él se encontraba en prisión, pero cuando salió de ella, retornó a la vivienda familiar con su compañera aquí demandante y con su hijo menor de edad y hasta el momento de su muerte.

Ello se deduce de la prueba testimonial traída al Proceso, y es que la testigo Cruz Elena Velásquez dijo que su hija -aquí demandante- convivió con el causante a partir del año 1988 hasta la muerte de éste último –junio de 2005-, habiéndose separado únicamente cuando él estuvo preso, pero que ella lo visitaba cada 8 días en la cárcel; y similar versión presentó la testigo Carolina Vela Ospina –prima del fallecido-; y como entre ambos sucesos hay 6 años y medio aproximadamente, incluido el tiempo de reclusión, se cumple así el requisito mínimo de convivencia exigido por la Ley y la jurisprudencia.



Por las anteriores razones, la Sala encuentra debidamente acreditada la calidad de beneficiaria de la aquí demandante, asistiéndole el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes que dejó causada su compañero permanente. **CONFIRMA.**

LIQUIDACIÓN.

VALOR Y NUMERO DE MESADAS AL AÑO:

La entidad reconoció Pensión de Sobrevivientes al hijo de la pareja en 1SMLV, y la A-quo reconoció 14 mesadas anuales, lo cual es acorde a Derecho, conforme a lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.

RETROACTIVO:

Como bien lo admitió la Parte actora en el interrogatorio de parte que absolvió en el Proceso, la misma recibió la pensión por el hijo menor en un 100% hasta diciembre de 2020. Y es por ello que tal como lo concluyó el A-quo, la pensión le será reconocida a la primera en un 50%, a partir del 4 abril de 2017 -cuando el hijo común cumplió los 18 años de edad y hasta 31 de octubre de 2021 (fecha de la Sentencia de 1ª I.), siempre que éste acredite estudios conforme a la Ley en ese interregno; la cual le será acrecentada a la demandante a un 100% cuando dicho hijo cumpla los 25 años de edad. En caso contrario, la actora tiene derecho al 100% de la pensión desde la fecha primeramente indicada.

En ese interregno, dicho Retroactivo asciende a la suma de \$ 26.413.897. **MODIFICA.**

año	Valor mesada	50%	n. de mesadas	total
2017	737,717	368.858	10m y 26dias	4.008.256
2018	781,242	390.621	14m	5.468.694
2019	828,116	414.058	14m	5.796.812
2020	877,803	438.803	14m	6.143.242
2021	908,526	454.263	11m	4.996.893

Total= \$26.413.897

ACTUALIZACIÓN CONDENA:

Del 4 abril de 2017 al 30 de junio de 2022 (mes anterior al de esta sentencia), dicha condena asciende a la suma de \$ **31.276.686**.

año	Valor mesada	50%	n. de mesadas	total
2017	737,717	368.858	10m y 26dias	4.008.256
2018	781,242	390.621	14m	5.468.694
2019	828,116	414.058	14m	5.796.812
2020	877,803	438.803	14m	6.143.242
2021	908,526	454.263	14m	6.359.682
2022	1,000,000	500.000	7m	3.500.000

Para un **TOTAL** de \$ **31.276.686**.

La entidad deberá continuar pagando a la Parte actora la mesada pensional en valor de 1 SMLV de cada año, con los debidos incrementos de Ley y sobre 14 mesadas pensionales anuales.

COSTAS PROCESALES DE PRIMERA INSTANCIA:

El artículo 365 del Código General del Proceso, establece:

“En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condena en costas se sujetara a las siguientes reglas:

Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso...”.

Sobre este tópico, la C.S.J Sala de Cas. Lab., en Sent. del 22 de ene/13, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno, Rad. 40993, sostuvo:

“Al respecto es preciso anotar que la disposición referida contiene un criterio objetivo, dado que no condiciona su imposición a circunstancia distinta a la pérdida del proceso o uno de los recursos a que se refiere, de allí que el actuar de buena fe no constituye razón de exoneración de la obligación que tiene la parte vencida de pagar los gastos generados con ocasión del proceso”.

Por obedecer entonces dicha condena a un criterio objetivo, está a cargo de la Parte demandada, vencida en el Proceso. Líquidense por la Secretaría del Juzgado de Origen. **CONFIRMA.**

Igualmente están a su cargo las de Segunda Instancia, por haber resultado dicha Parte vencida en el recurso interpuesto, cuyas Agencias en Derecho se fijan en 1 SMLV.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE:

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el 13 de octubre del año 2021, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por la Señora **ENLLE VANESA HERRERA VELASQUEZ**, y en el que actúa como Litis Consorte Necesario por pasiva, el joven **JHOJAN ALEXANDER LOPEZ HERRERA**, en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL-UGPP-**, en cuanto a la liquidación del retroactivo pensional concedido a la demandante, la cual asciende a la suma de \$ 26.413.897, según las razones expuestas en la parte motiva de esta Sentencia.

El valor actualizado de dicho retroactivo al 30 de junio de 2022, es de \$ **31.276.686**.

La entidad deberá continuar pagando a la Parte actora la mesada pensional en valor de 1 SMLV de cada año, con los debidos incrementos de Ley y sobre 14 mesadas pensionales anuales.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás.

TERCERO: COSTAS PROCESALES DE SEGUNDA INSTANCIA: A cargo de la Parte demandada, vencida en el Recurso, cuyas Agencias en Derecho se fijan en 1 SMLV.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Los Magistrados,



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

EN AUSENCIA JUSTIFICADA

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ